

Clases y movimientos sociales en El Salvador: caracterización, desarrollo e intervención

Segundo Montes

Exposición tenida en el VIII CONGRESO CENTROAMERICANO DE SOCIOLOGIA, Guatemala, 10-15 de octubre de 1988; Mesa Redonda No. 2: CLASES Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN CENTROAMERICA; CARACTERIZACION, DESARROLLO E INTERVENCION).

Introducción

El tema propuesto para esta mesa de trabajo es fundamental no sólo para una discusión académica que busque depurar los conceptos y las categorías, sino también para cualquier estudio sociológico que tenga como pilar el conocimiento de las estructuras para el análisis de las coyunturas y de los procesos socio-políticos. En mi intervención se pretende incursionar en la estructura social de El Salvador, así como los otros expositores lo harán en la de sus respectivos países de la región.

En la primera parte de mi trabajo intentaré un análisis estructural de las clases sociales existentes hoy en día en El Salvador, así como de las divisiones y subdivisiones de las mismas. En la segunda me propongo describir el comportamiento de las diferentes fuerzas sociales en la presente coyuntura, considerada como de "crisis orgánica" de acuerdo a la categoría gramsciana.

I. Análisis estructural de las clases sociales

Tomando como base los elementos analíticos de Marx en sus obras históricas, o la formulación más depurada y teórica de Lenin (Lenin, 1961, 242), así como los nuevos elementos aportados por autores de diversas corrientes de pensamiento y sus críticas respectivas (Gurvitch, 1971, 234), estimo indispensable considerar —después de un esfuerzo de

cuantificación de los integrantes de cada clase y de las divisiones y subdivisiones a su interior— tres elementos en la estructura de clases de El Salvador en la realidad histórica presente: 1 la posición que ocupan en el concreto modo de producción y las relaciones sociales que de él se derivan, que es el elemento más material, estructural y objetivo; 2) la percepción que tienen de la realidad anterior las distintas personas y grupos, que es un elemento más subjetivo y vinculado con la alienación; 3 la conciencia de clase y su opción consecuente, que es un elemento subjetivo-objetivo de comportamiento socio-político. El desarrollo histórico de las estructuras y de los diferentes grupos sociales, en su triple dimensión, va a conducir a la composición estructural de las clases sociales y al comportamiento de las diferentes fuerzas sociales en períodos y momentos históricos determinados.

Los criterios en principio simples para determinar el primer elemento, más objetivo y material, la propiedad de los medios de producción o de la sola fuerza de trabajo, en la realidad concreta e histórica no son suficientemente operativos en una determinada formación económico-social, y obligan a divisiones y subdivisiones de categorías para describir la estructura de clases salvadoreña (PCS, junio de 1980, 28-43). Presentaré primero un esquema descriptivo y cuantitativo de las clases y sus divisiones, para luego analizar en ellas los tres elementos aludidos.

Clase fundamental	fracciones	sectores:	subsectores
dominante: 0.76%	rentistas: burguesía: 0.76%	agrario: financiero: industrial: servicios:	grandes propiet. alta gerencia medianos propiet.
capas medias peq. burguesía: 26.7%	"intellig." (3.4%): empleados (10.7%): peq. prop. (12.6%):	agrario industrial servicios	
dominada: 77.5%	semiproletarios: (31.2%) proletariado: (25.6%) subemp. - desempleados: (14.4%) desplaz.-refugiad. receptores de US\$ de parientes en USA	agrario industrial servicios servicio doméstico (6.3%)	
capa ínfima:	lumpen < 1%		

I. Caracterización y cuantificación por categoría:

Dejando a un lado la discusión más teórica —y aquí menos importante— de si son, o no, del todo correctas las categorías adoptadas para las subdivisiones (capas, fracciones, sectores y subsectores), dediquémonos a ver si el esquema presentado responde a la composición social salvadoreña actual, y apliquemos a cada uno de esos grupos los tres elementos analíticos propuestos anteriormente.

En primer lugar, hagamos un esfuerzo por cuantificar cada uno de los grupos, aproximándonos lo más posible a la realidad en cuanto los escasos datos lo permiten.

1.1. Clase fundamental dominante:

La fracción de los rentistas es prácticamente desconocida. Si puede haber disminuido en el sector agrario, por la aplicación de la Fase I de la reforma agraria, lo más probable es que se haya incrementado con la presente crisis del país, a consecuencia de la que varias personas pueden haber colocado sus capitales en la banca, en bienes raíces, en acciones, en la bolsa de valores, o en edificios de alquiler, ya sea en el extranjero, ya sea en El Salvador mismo, para vivir holgadamente de lo que les renten o produzcan. La falta de registros adecuados, de investigación pertinente, o la confidencialidad misma de los datos impiden que se pueda conocer su magnitud, si bien no puede ser muy grande el número de tales personas ubicadas en la cúspide de una obtusa pirámide de la estructura económica que por su propio desarrollo tendía a suprimir esa categoría o transformarla progresivamente en burguesía.

En la fracción de la burguesía se han introducido algunas modificaciones en el sector agrario, como consecuencia de la Fase I de la reforma agraria —como en el financiero, por la reforma bancaria. No obstante, el número afectado en el primero es muy reducido, no sólo en valores absolutos, sino también en cuanto a expulsarlos de esa fracción, por el hecho de haber podido conservar parte de su propiedad en virtud del "derecho de reserva", y haber podido derivar el valor de lo expropiado, mediante el dinero o los bonos, a otros sectores incluso más rentables de la economía. En cuanto al segundo, la reforma bancaria no despojó de toda la propiedad, sino de una parte de la misma, en favor de nuevos accionistas, del estado o de los empleados que quisieran y pudieran adquirirla, pasando más bien la administración y el control de la banca a manos del estado, mientras que parte de la propiedad que no había sido descapitalizada se mantuvo, o la indemnización liberó fondos para invertir en otros sectores o para expatriarlos al extranjero.

En el subsector de los "grandes propietarios" ubicaremos a las empresas privadas "gigantes" y "grandes", que suman un total de 2,271

(Montes, 1984, 199, Cuadro I), de las que 1,941 correspondían al sector agropecuario, 126 al del comercio, 102 al de la industria, y las 102 restantes al de la banca y demás servicios (Ibidem, 200, Cuadros III y IV; Sevilla, 1984, 168 y 170, Tablas No. 8 y 9) para antes de las "reformas", pero cuya composición, como se ha explicado antes, no ha variado sustancialmente. En efecto, por el Decreto 154, aplicado a la Fase I de la reforma agraria, se afectó nada más a 470 propiedades agropecuarias (24.2% de las gigantes y grandes propiedades: PERA, 1985, 5). Ahora bien, suponiendo que cada propiedad corresponde a una familia —lo que no parece ser muy exacto, al menos en las propiedades agropecuarias, donde las de 500 Has. y más eran sólo 206 (Thome, 1984, 238), pero las afectadas por el Decreto 145 que tomaba esa misma extensión de terreno fueron más del doble, 470, algunas de ellas por confusión o abuso, pero las más por pertenecer varias un mismo propietario; y algo similar se puede asumir para los demás sectores, en los que algunas empresas, tal vez, serán de propiedad asociativa, pero también hay familias propietarias de más de una empresa; más aún, en los diversos sectores hay diversificación de la propiedad de una misma familia (Colindres, 1977; Sevilla, 1984)—; suponiendo, repito, que cada propiedad corresponde a una sola familia, y sobre la base de aproximadamente 800,000 familias en El Salvador en las fechas de los datos (Montes, 1988a, 82-89, 133), los grandes propietarios apenas alcanzarían el 0.28% de las familias salvadoreñas, de los que en el sector agropecuario —en caso de no ser propietarios también en otros sectores— se concentraría el 0.24% de las familias, en el de la industria el 0.013%, en el del comercio el 0.016% y en el resto para finanzas y demás servicios el 0.013% de las familias del país. La concentración de varias propiedades en una sola familia reduciría aún más los porcentajes para toda la población salvadoreña.

El subsector de la "alta gerencia" es más difícil de definir, sobre todo en economías subdesarrolladas en las que la "clase gerencial" no ha adquirido ni el crecimiento ni la relevancia que en los países más desarrollados, tanto en número como en poder de decisión en la economía. Comprenderíamos en ese subsector, para el caso salvadoreño, a los altos profesionales que tienen gran influjo en la empresa, ya sea como asesores, como altos gerentes o en otros puestos importantes en la dirección de la empresa, con relativa capacidad de decisión, altos honorarios, participación en las utilidades, y algunas veces coparticipación en la propiedad o retribución en forma de acciones. En tales condiciones estimo que no se da el caso para el sector agropecuario, sino casi exclusivamente en los otros sectores, sobre todo en las "empresas gigantes"; suponiendo que para cada gigante hubiera dos personas de tal categoría, y una para cada "empresa grande", tendríamos un total hipotético y máximo de 476 personas de "alta gerencia" (0.06% de las familias salva-

doreñas), cifra que probablemente es mucho menor, por la definición adoptada, por la repelición de algunas personas en varias empresas, o por no distinguirse en algunos casos de la familia misma de los propietarios (hijos, yernos o parientes muy cercanos). Restaría agregar la "alta gerencia" del sector público, que se limitaría a unos pocos administrativos de máximo nivel en las entidades autónomas productivas del estado, cifra que no alteraría significativamente los datos anteriores.

Por último, en el subsector de los medianos propietarios se considera a todos aquellos que tienen una propiedad para la que contratan mano de obra y obtienen una reproducción ampliada del capital. Los límites son difíciles de definir, pero nos atenderemos a la categoría de "medianas empresas", con las debidas precauciones: 3,350 en total, de las que 2,238 serían del sector agropecuario (Montes, 1984, 199-200, Cuadros I y III). Suponiendo otra vez que cada propiedad pertenece a una familia distinta, y que ninguna de estas propiedades corresponde a dueño alguno de propiedades mayores, tendríamos un 0.42% de familias salvadoreñas en este subsector (0.28% en el sector agropecuario).

Partiendo de las categorías adoptadas para este trabajo, en la clase fundamental de la burguesía salvadoreña se podría incluir hasta una proporción máxima hipotética del 0.76% de las familias salvadoreñas, aunque presumiblemente la cantidad y proporción será aún menor por la concentración de varias propiedades de un mismo sector, y de propiedades de varios sectores a la vez, en algunas de esas familias.

1.2. Clase fundamental dominada:

El semiproletariado se puede encontrar en todos los sectores, ocupado en muchos casos en el "sector informal" de la economía; pero estrictamente considerado es más aplicable al agrario, donde los insuficientes ingresos obtenidos en la parcela tienen que ser complementados con la venta parcial o temporal de la fuerza de trabajo, y en ese sector no sólo es más medible con los datos de que se dispone, sino también es mayoritario respecto a los otros sectores —en los que se puede confundir con el "subempleo". De las 249,163 microempresas existentes en El Salvador, 234,941 serían microexplotaciones agropecuarias (Montes, 1984, 199-200, Cuadros I y III). La reforma agraria no ha modificado sustancialmente esas cifras, pues la Fase III lo que ha hecho es convertir algunas microexplotaciones de arrendamiento en microexplotaciones en propiedad, con un promedio de 1.5 Has. por beneficiario que generan trabajo para 48.6 días laborables al año en promedio (Montes, 1986, 247-249), que los conserva como semiproletarios. Si se mantiene el mismo supuesto de que cada microempresa corresponde a una familia distinta —más verosímil aquí que en las gigantes y grandes—, estarían comprendidas en esta categoría 31.15% de las familias salvadoreñas.

En el proletariado, que es la fracción más propia y específica de la clase dominada en un modo de producción capitalista, debemos atenernos a los datos disponibles, no del todo coincidentes entre sí. Toda la empresa privada salvadoreña generaba (años 1978-79) 214,212 empleos remunerados, de los que 87,033 correspondían al sector agropecuario; ahora bien, si se eliminan los administrativos y técnicos —que corresponden a las capas medias, no al proletariado estricto—, y que sólo para las empresas no agropecuarias con 5 o más trabajadores pueden ascender a unos 27,000 (Montes, 1984, 199-202, Cuadros I-VI; Sevilla, 1984, 168-172, Tablas No. 8-10), podríamos considerar unos 180,000 proletarios para el total, de ellos unos 85,000 para el sector agropecuario (22.5% y 10.6% respectivamente de las familias salvadoreñas, suponiendo también que cada trabajador representa a una diferente familia, lo que no es el caso en los diversos sectores, dado que más de un miembro de la familia, de distinto o del mismo sexo, tiene trabajo remunerado); pero si se agregan unos posibles 25,000 propiamente dichos proletarios del sector público —como se analizará en las "capas medias" en el sector de los "empleados"—, el total del proletariado podría elevarse a unos 205,000 (25.6% de las familias salvadoreñas, suponiendo que cada uno representa a una distinta). Si en 1979 todos los sectores, excluido el agropecuario, generaban 218,171 empleos (Montes, 1984, 201-202, Cuadros V y VI), a los que habría que agregar los escasos cotizantes al Seguro Social del sector agropecuario que trabajan en la agroindustria, la cifra sería bastante coincidente con los 225,500 cotizantes en ese mismo año (Montes, 1988a, 139, Cuadro XXVII), de los que no todos son proletarios, sino empleados, familiares no remunerados, e incluso propietarios y accionistas.

La fracción de subempleados y desempleados es aún más difícil de cuantificar con exactitud o aproximación. Si en 1980 se consideraba como del 55% y 16.1% de la PEA respectivamente, en 1985 el desempleo abierto se elevó al 33.7% y el subempleo superaba el 40% según estimaciones. Ahora bien, dado que los criterios para determinar la PEA son cuestionables, es más realista calcular las cifras absolutas de desempleados y subempleados en base a la PEA reconocida y a los porcentajes oficiales en ambas categorías (Montes, 1988a, 83-87, Cuadros V y VIII): en 1980 habría 259,371 desempleados y 886,050 subempleados, mientras que en 1985 los desempleados se elevaban a 603,840, y los subempleados a por lo menos 754,800; suponiendo que cada uno de ellos representa una familia distinta, la suma de ambas cifras superaría las familias de El Salvador en las mismas fechas, por lo que hay que considerar un mínimo de 2 miembros de la PEA por familia, en cuyo caso los desempleados representarían al 14.4% de las familias de 1980 y al 27.4% en 1985, mientras que los subempleados al 49.2% de las familias

en 1980 y al 34.3% en 1985. Sin embargo, en esta fracción, para efectos de cuantificación, estimo que sólo hay que tomar en cuenta a los desempleados —quienes disponen únicamente de su fuerza de trabajo, pero no pueden venderla porque el sistema no ofrece suficientes puestos de trabajo para la población—, pues gran parte de los subempleados corresponden al mismo tiempo a la fracción de semiproletarios, o incluso a algunos pequeños propietarios que temporalmente buscan trabajo —ellos, o algún miembro de su grupo familiar, para incrementar los escasos ingresos que les produce el precario medio de producción.

En todas estas fracciones se da una subdivisión por sectores. Pero hay aquí uno que merece especial consideración, el del servicio doméstico: en 1971 el 33% de la PEA femenina del departamento de San Salvador trabajaba en ese rubro, y en 1980 el 19.9% de la PEA femenina del país trabajaba como doméstica o como familiar no remunerada, con mayor incidencia entre los 10 y los 24 años de edad (Sermeño, 1988, 29).

La guerra civil, la represión desalada, las muertes violentas y las migraciones forzadas que se derivaron, han producido cambios en la composición social salvadoreña. El aproximadamente medio millón de desplazados internos, de conformidad con la tasa de miembros por grupo familiar entre los concentrados, de 5.5 personas por jefe de familia, representaría a 90,909 familias —9% de las familias del país en esos años— (Instituto, 1985, 35-37, Cuadros 18 y 22). Si bien esta cantidad y porcentaje no hay que agregarlo al resto de categorías, porque en su inmensa mayoría eran pequeños propietarios y semiproletarios (Ibidem, 193-217), en el proceso se han convertido en una categoría especial: por un lado los mantiene como desempleados o subempleado —integrándose cada vez más al sector informal de la economía—, pero que por otro lado es asistida humanitaria y gratuitamente con alimentos y algunos otros bienes de consumo básico. La tendencia, por lo tanto, es que una parte de esa población desplazada retorne a sus lugares de origen si se da una solución al conflicto en fecha no muy lejana, pero la mayoría se irá integrando al sistema formal y, sobre todo, informal de la economía y de la sociedad marginal (Instituto, 1985; 1986). Algo similar puede afirmarse de los refugiados en el área centroamericana, especialmente los que emigraron familiar y colectivamente a Honduras y una parte de los emigrados a Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Guatemala y Belize, que podrían totalizar unas 100,000 personas, representando un 1.8% de las familias salvadoreñas en esos años (Instituto, 1985, 35, Cuadro 18). Para el resto de los refugiados en el extranjero la situación es diferente, no sólo por el hecho de que provengan en gran mayoría de fracciones diversas y capas medias, sino porque predominantemente es un miembro del grupo familiar el que ha emigrado, a veces acompañado, precedido o seguido por

algún otro miembro, pero no la familia entera, que en su núcleo fundamental ha permanecido en el país; de todos modos, se trata de una cantidad adicional de unos 150,000 sin tomar en cuenta los emigrados a los Estados Unidos (Ibidem).

Brevemente es necesario considerar un fenómeno de gran trascendencia para la composición económica y social de El Salvador en el presente. El 35.56% de las familias salvadoreñas reconocen tener parientes en los Estados Unidos (Montes, 1987, 32), pero como un 32% de las mismas no recibe ningún envío de dólares de los emigrados a los Estados Unidos, hay un 24.18% de las familias salvadoreñas que dicen que sí reciben remesas monetarias de sus parientes emigrados allá, lo que representa un promedio de US\$ 188 mensuales para las familias que reciben dinero de sus parientes emigrados a los Estados Unidos (Montes, 1987, 113, Cuadro XXII, en comparación con datos de pág. 32). Este grupo de familias no es ninguna fracción especial y distinta de las demás, sino que pertenecen a las distintas fracciones, capas y sectores, aunque su ubicación se puede haber modificado en el conjunto de las categorías por las remesas recibidas con las que pueden tener acceso a bienes de consumo y/o de producción, ya sea en el sector formal o en el informal de la economía salvadoreña.

1.3. Capas medias:

En las capas medias tenemos en primer lugar lo que se puede denominar como "intelligentsia", que comprendería a 3,561 profesores e instructores universitarios, 7,525 miembros de asociaciones profesionales, por lo menos 1,000 "profesionales" que trabajan en medios de comunicación social, y un mínimo de 20,000 maestros (Montes, 1984, 175-186); para un total de 32,086 personas, que de representar cada una a una familia diferente, podrían equivaler al 3.4% de las familias salvadoreñas. Las cifras tendrían que ser depuradas, en primer lugar por el hecho de que varias de esas personas ocupan más de un puesto y/o trabajan además como "empleados públicos", en segundo lugar porque no todas las pertenecientes a esas profesiones y trabajos están afiliadas a las asociaciones contempladas en los datos; por todo ello, posiblemente el conjunto absoluto se adecúe bastante a la realidad, aunque el valor porcentual tiene que ser menor por el hecho de que en esas familias ha de trabajar más de una persona.

En cuanto a la categoría de "empleados", el sector público en 1985 ocupaba a 118,534 personas (Montes, 1988a, 137, Cuadro XXIV), de las que habría que excluir todas las que trabajan en la categoría de "intelligentsia", más las que son propiamente proletarios, tanto en el gobierno central como en las instituciones autónomas y municipalidades, con lo que la cifra total de empleados estimo que no sobrepasará los 75,000, in-

cluidos los miembros de las Fuerzas Armadas, —que de representar cada uno una familia diferente, lo que no será el caso, significaría el 7.9% de las familias salvadoreñas—; si se agregan los aproximadamente 27,000 administrativos y técnicos ocupados por la empresa privada (Montes, 1984, 201, en base a Cuadro V) —suponiendo que ninguno de ellos está comprendido ya en otra fracción, y que represente a una familia distinta— sumarían otro 2.8% de las familias salvadoreñas.

La última categoría dentro de las capas medias viene dada por los pequeños propietarios. Son los que tienen medios propios de producción, pero que no pueden lograr una reproducción ampliada del capital, y que normalmente ni contratan fuerza de trabajo ni venden su propia fuerza de trabajo; es decir, se trata de una economía familiar y de subsistencia, en la que muchas veces se estima como ganancias o beneficios los salarios disfrazados, tal vez inferiores incluso a los vigentes en el mercado laboral. De acuerdo a los datos disponibles, en El Salvador había un total de 77,843 "empresas pequeñas" —de ellas 31,748 en el sector agropecuario—, que junto con las "microempresas" creaban un puesto de trabajo remunerado por cada tres de ellas (Montes, 1984, 199-200, Cuadros I y III), lo que representaría, en el mismo supuesto de empresa por familia, 9.7% de las familias salvadoreñas (3.9% con pequeña propiedad rural) comprendidas en esta categoría. La reforma agraria, por su parte, ha modificado ligeramente la composición, al convertir a los beneficiarios de la Fase I en pequeños propietarios (algo más de 6 Has. por beneficiario directo) cuando anteriormente eran proletarios rurales o subempleados —los beneficiados con la Fase III se mantienen como semiproletarios, cambiando de arrendatarios a propietarios de parcelas de 1.5 Has. en promedio—, con lo que los 27,456 beneficiarios directos de la Fase I de la reforma agraria habrán incrementado en 2.9% las familias comprendidas en esta categoría (Montes, 1986a, 247, Cuadro I).

1.4. Capa ínfima:

Resaltaría únicamente cuantificar las personas ubicadas en la capa ínfima o lumpen, para lo que carecemos de datos confiables; de todos modos no representa una proporción significativa en la sociedad salvadoreña, como "profesión" —no como acción esporádica para sobrevivir—, pues la inmensa mayoría de desempleados, subempleados, desplazados, pobladores de zonas marginales, busca afanosamente el trabajo o medios dignos de subsistencia, la mayoría en el expandido sector informal de la economía. Estimo que los que constituyen el lumpen estrictamente considerado no alcanzan ni el 1% de la población de El Salvador.

Como resultado de todos los cálculos realizados para aproximarnos lo más posible a una cuantificación de las diversas categorías, con todas las

precauciones y limitaciones ya señaladas, hemos alcanzado un 105.96% en la suma de las mismas, lo que muestra que los cálculos no pueden ser del todo correctos y que hay sobreestimación en algunas categorías —a pesar de que no se han incluido los desplazados, entre otros.

Ahora bien, como hemos supuesto que cada persona representaba a una familia, cosa que no ocurre en algunos grupos sociales, otro cálculo más verosímil —que me ofrece más credibilidad, y por ello lo tomaré como criterio más probable y confiable para el resto del trabajo—, basado en la población adulta y que en realidad debía ser considerada económicamente activa, que comprende algo más de la mitad de la población del país (Montes, 1988a, 83-86), nos daría la siguiente distribución porcentual, de acuerdo a los mismos datos y categorías adoptados anteriormente:

clase fundamental	fracciones y subsectores	
	grandes propietarios:	0.11% de PEA real
clase dominante:	alta gerencia:	0.02% de PEA real
0.30% PEA real	medianos propietarios:	0.17% de PEA real
	intelligentsia*	1.58% de PEA real
capas medias:	empleados:	3.67% de PEA real
10.84% PEA real	peq. propietar	5.59% de PEA real
	semiproletarios:	12.25% de PEA real
clase dominada:	proletarios:	9.22% de PEA real
57.22% PEA real	desempleados:	21.75% de PEA real
	ser. domest.:	5.0% de PEA real
	desplazados:	9.0% de PEA real
capa ínfima:	lumpen:	< 1.0% de PEA real
< 1% PEA real		

Para el sector del "servicio doméstico", en base a los datos disponibles, si el 19.9% de la PEA femenina del país trabaja en 1980 en eso o como familiar no remunerado, supongo que se puede dividir en partes iguales, y dado que las mujeres constituyen aproximadamente la mitad de la población, habría un 5% de la PEA total real trabajando en el servicio doméstico. En todas las categorías relacionadas con el empleo, fuerza laboral, etc. no hay dificultad en los cálculos, relacionados con la PEA real; donde se puede objetar el método es en las relacionadas con la propiedad, en las que hemos tomado cada una como representativa de la fuerza de trabajo de cada familia. Para la grande y mediana propiedad estimo que es válido, pues consta por diversas fuentes que en promedio cada familia posee más de una propiedad —como se vio en la aplicación

de la Fase I de la reforma agraria—, con lo que se equipararía la cantidad de propiedades con la PEA real de las familias propietarias; para la pequeña propiedad, ciertamente en las de la Fase I ni siquiera hay trabajo todo el año para los beneficiarios directos —180 días al año en promedio (Montes, 1986, 249, Cuadro III)—, y para el resto de propiedades posiblemente no sea muy diferente en una parte de los casos, aunque ahí puede estar subestimada la proporción de la PEA real representada.

El total de los rubros anteriores arroja un 69.36%, quedando el 30.64% que se distribuiría entre rentistas, subempleados, refugiados y otros no contemplados en las categorías bien definidas, o sería un ajuste a las estimaciones realizadas en cada una o en alguna de ellas.

2. Posición que ocupan en el modo de producción y relaciones sociales derivada de ella:

En la parte anterior se ha procurado cuantificar las diversas categorías que integran la estructura social salvadoreña. Si las dos clases fundamentales, y las fracciones de clase correspondientes más estrictamente al modo de producción capitalista, son, por un lado, ¹⁴la burguesía, que abarcaría nada más el 0.3% de la PEA real del país —y consiguientemente de la población y de la sociedad— y, por otro, el proletariado se extendería nada más al 9.22% de lo mismo, se explica el que se cuestione cuál es en realidad el modo de producción dominante en El Salvador (Montes, 1983, 30-37, 231-235).

El lugar que ocupan en el modo de producción, y las relaciones sociales que de ahí se derivan, no es algo uniforme ni homogéneo.¹⁵ En la clase dominante ciertamente el lugar que ocupan las diversas fracciones, y todas las subdivisiones comprendidas en la misma, es bastante homogéneo, como propietarios de los medios de producción, ya sea en forma dinámica, como en la burguesía, ya sea en forma pasiva, como en los rentistas —incluso la "alta gerencia", aun en el caso de que no tenga participación en el capital, de hecho ejerce funciones determinantes en la producción, casi a modo de "propietario"—; en cuanto a las relaciones sociales, son en esta clase predominantemente capitalistas, con una ausencia cada vez mayor de los verdaderos propietarios en las relaciones directas con la fuerza de trabajo, mediadas por personal administrativo; antagónicas con la clase opuesta y en lucha con ella.

En la clase dominada, por el contrario, la posición en el modo de producción es sumamente heterogénea, así como diversas las relaciones sociales derivadas de ella. Los proletarios ocupan un lugar específico, claro y homogéneo, y sus relaciones con la clase antagónica también están bien definidas por la lucha de clases —algo similar se puede aplicar a las fracciones de semiproletarios, subempleados y desempleados, cuando venden su fuerza de trabajo. En cambio, los semiproletarios —cuando no

venden su fuerza de trabajo— ocupan un lugar diverso en el sistema capitalista, dado que disponen de algún medio precario e insuficiente de producción, que les asegura en parte la reproducción de su fuerza de trabajo, e incluso venden parte de su producción en el mercado, tortaleciendo con ello no sólo la dinámica del sistema y la extracción de plusvalía por el mismo de múltiples formas —constituyendo o incrementando, además, el ejército laboral de reserva global—, sino también garantizando, en el sector rural, la mano de obra disponible en los períodos de más demanda para las plantaciones de productos de exportación (Montes, 1986, 74-120). Los subempleados —en la medida en que no coincidan con los semiproletarios— y los desempleados constituyen la masa mayor del ejército laboral de reserva, junto con una fracción de los desplazados; las relaciones sociales en el modo de producción, mientras no vendan su fuerza de trabajo, son distintas a las de los proletarios, y se mantienen a la espera de oportunidades. El sector del servicio doméstico, por su parte, ocupa un lugar diferente en el modo de producción, ocupando tiempos más prolongados de la jornada, compartiendo muchas veces la vivienda con los contratantes, recibiendo la retribución parte en dinero y parte en alimentación y otros servicios básicos; las relaciones sociales no son propiamente capitalistas, sino más personales —precapitalistas—, más de "servidumbre-señorío" —incluido en muchos casos el "derecho de pernada". Los desplazados, cuando no son contratados para algún tipo de trabajo, no ocupan lugar alguno en el modo de producción —ni siquiera en muchos casos participando en el mercado de adquisición de bienes—, sino a lo más en cuanto ejército laboral de reserva, y son mantenidos con una vida precaria gracias a las donaciones internacionales; sus relaciones sociales, por tanto, son diferentes, de dependencia de la asistencia humanitaria, unida a una dependencia ideológica y política creciente (Instituto, 1985; 1986). Por último, los que reciben remesas en dólares de sus familiares emigrados a los Estados Unidos, cuyo monto representa, en promedio, el 60% de todos los ingresos familiares, pero en muchas familias es a veces la única fuente de ingresos monetarios (Montes, 1987), en la medida y proporción en que tengan medios propios de trabajo y vida, o vendan su fuerza de trabajo, comparten la posición correspondiente en el modo de producción y las relaciones sociales derivadas del mismo; pero las remesas y su conversión los ubica en un lugar distinto del modo de producción —tal vez sólo en la circulación y el mercado, no siempre nacional—, y las relaciones sociales están vinculadas con ese hecho, tanto respecto a los contratadores de su fuerza de trabajo, como en la necesidad o no y la frecuencia de venta de la misma y de participación en el mercado de bienes y servicios; de hecho, en gran parte de ese numeroso grupo, las relaciones sociales son más bien con el mercado laboral y de bienes y servicios, así como con las luchas de clases y étnicas en los Estados Unidos, por la mediación de los

familiares que allí venden su fuerza de trabajo y la reproducen bajo altas tasas de explotación y extracción de plusvalía, mientras que aquí convierten las remesas en un medio de reproducir la fuerza de trabajo de sus descendientes y de facilitar una especie de "seguro de ancianidad" para sus progenitores que posibilitaron su migración.

En las capas medias, por su parte, también existe una gran heterogeneidad. Mientras la "intelligentsia" ocupa un lugar imprescindible para la reproducción ideológica del sistema y del modo de producción, en procura de un consenso y creación de la sociedad civil, los empleados ocupan un lugar también imprescindible en la producción y en el sistema, creando o posibilitando tanto la sociedad civil como la sociedad política; todos ellos, realmente, venden su fuerza de trabajo y en cierto sentido podrían ser equiparados al proletariado, pero el lugar que ocupan ciertamente difiere —prescindiendo de su percepción y opción socio-política—, no sólo en la retribución económica y social, sino también en el trabajo mismo y en su posición objetiva diferenciada y dicotomizada; las relaciones sociales que de ahí se derivan, si bien podrían ser estrictamente laborales y de clase antagónica y explotada por la propietaria de los medios de producción o por el estado, son más bien de puente entre las clases antagónicas y de instrumentalización y mediación para someter a la clase proletaria y ayudar a la extracción de la plusvalía. En cambio, la fracción de los pequeños propietarios ocupa un lugar distinto en el modo de producción, ordinariamente no contratando mano de obra asalariada, pero sí acudiendo al mercado a vender sus productos, por lo que en la realización de sus beneficios transfieren plusvalía al capital, así como en la adquisición de insumos, créditos y bienes de otra índole, al mismo tiempo que explotan la fuerza de trabajo ya sea de ellos mismos ya sea de los familiares no remunerados que trabajan en esa propiedad; las relaciones sociales al interior del grupo laboral son normalmente de parentesco y de explotación de los menores, mujeres y parientes menos cercanos, mientras que hacia el exterior son de competencia y lucha con los intermediarios y el capital, pero sin llegar a ser antagónicas mientras se mantenga, asegure y reproduzca la propiedad y economía familiar.

Respecto a la capa íntima —el lumpen— no sería preciso analizarla de manera específica en la sociedad salvadoreña, pues no parece presentar mayores diferencias ni características peculiares frente a la de otras sociedades. Su ubicación está bien definida como escoria o desecho de la sociedad, que ella misma crea; las relaciones sociales que mantiene con ella son las de aprovechar las oportunidades que aquélla le brinda y propicia a través de los mecanismos de represión, explotación y permisón de transgresiones a las pautas sociales aprobadas y reconocidas oficialmente.

3. Percepción de esa realidad:

Una cosa es la realidad, la posición que ocupan en el modo de producción y las relaciones sociales objetivas que se derivarían de ella, y otra cosa es la percepción subjetiva e ideologizada que se tiene de esa realidad, conformando el ámbito de la alienación o de la conciencia correcta.

En la clase dominante existe una percepción bastante correcta de la realidad, aunque se den en su seno contradicciones secundarias, sublimadas ideológicamente en algunos medianos propietarios por la lucha y defensa de sus intereses —considerados como colectivos y homogéneos a toda la clase— frente a la clase antagónica y al ejército laboral de reserva. En cambio, en la clase dominada la percepción no siempre es correcta ni mucho menos homogénea: los semiproletarios en muchos casos no se sienten explotados por el capital de múltiples formas, sino que comparten una alienación introyectada de propietarios de medios de producción, de diferenciación objetiva y de intereses con las demás fracciones; los proletarios, más claros y consistentes, al menos en el sector urbano y partes del rural, han ido adquiriendo una percepción cada vez más correcta —tal vez no todos los del "sector público", que en algunos casos pudieran considerarse a sí mismos como "empleados"—, si bien a su interior se dan núcleos importantes de alienación, ya sea religiosa fatalista y fundamentalista, ya sea de beneficiarios de reformas y opciones o apoyos políticos, ya sea por los vínculos precapitalistas de colonos con los propietarios —o gremialistas con los patronos artesanos—, ya sea de remembranza de situaciones percibidas como mejores con el dueño de la finca antes de la reforma agraria y la constitución de cooperativas de producción manejadas o controladas muchas veces por funcionarios externos. Para los desempleados y subempleados, por su parte, la percepción de la realidad objetiva está dividida entre la interpretación fatalista, la predisposición al servilismo humillante, o la interpretación más correcta de la realidad. La percepción, en fin, que tienen los desplazados y refugiados, si no es de fatalismo resignado en muchos casos, sólo es de temporalidad y transición a un retorno a las condiciones y situación previas a la migración, adjudicando el origen de su problema más a la guerra que a las causas estructurales de la misma y de su precariedad de vida (Instituto, 1985; 1986), víctimas, por lo tanto, de una alienación que se va profundizando por la dependencia en la subsistencia, la instrumentalización de que son objeto, la manipulación sociopolítica, la articulación social progresiva al sistema en zonas de predominancia del mismo, y al inductramiento a que se ven sometidos a través de sus hijos reclutados para el servicio militar. El caso de los que reciben remesas de familiares en los Estados Unidos, tan generalizado, los ubica en una situación de privilegio, percibido como tal, sin suficiente conciencia de la explotación a que se ven forzados sus familiares en el

país receptor, ni tampoco del nivel de explotación a que ellos mismos se ven sometidos en El Salvador por el mercado, en los bienes que adquieren, o por las agencias y personas tramitadoras de envíos y cambio de moneda que logran pingües ganancias y exportan cuantiosos capitales y divisas al exterior gracias a ellos (Montes, 1987).

Pero es tal vez en las capas medias donde la percepción de la realidad puede estar más alienada e ideologizada (Montes, 1980, 171, 203-205). Gran parte de la fracción de la "intelligentsia" —con excepción de un amplio sector magisterial— no sólo no percibe la realidad de su ubicación en el sistema y en el modo de producción, como asalariados del mismo, sino que se perciben como privilegiados, independientes y creadores intelectuales de consenso o de una nueva sociedad, agradecidos, por lo mismo, al sistema y a las clases dominantes por la oportunidad que les brindan de desarrollar sus cualidades personales y de crear o difundir ideología. Entre los empleados, por su parte, existe una gran heterogeneidad en la percepción de su realidad objetiva, desde un alto nivel de conciencia correcta, hasta un máximo de alienación hacia el sistema y hacia los propietarios de los medios de producción o hacia el estado —que denomina "empleados" a una parte del proletariado contratado por él—, que los distinguen, diversifican, gratifican y honran, sintiéndose parte importante, obligados a reproducir el sistema de dominación hacia la clase trabajadora, convirtiéndose a veces en fanáticos instrumentos de explotación u opresión de la clase a la que estrictamente pertenecen y de la que han surgido. Los pequeños propietarios, en fin, predominantemente tienen una percepción distorsionada, incorrecta y alienada de la realidad objetiva, compartiendo la conciencia de propietarios y a veces aliados a los gremios empresariales, inconscientes del grado de explotación a que están sometidos por esos mismos a los que tal vez defienden y con los que se solidarizan.

La percepción de la realidad que tenga el lumpen es difícil de medir o conocer sin una investigación específica. Si bien es de suponer que los jefes y dirigentes posean una conciencia correcta de su lugar y relaciones en el sistema, es presumible que la mayor parte de los integrantes de la base padezcan una profunda alienación, generada no sólo por el sistema mismo, sino profundizada e inducida, a veces por mecanismos de intimidación y chantaje, por la cúpula que dirige y controla esta capa social.

4. Conciencia de clase y opción consecuente:

La conciencia de clase, que de alguna forma se ha insinuado ya en el apartado anterior, no es lo mismo que la percepción de la realidad, aunque sí se basa en ella, al menos en la percepción correcta; tampoco es una consecuencia mecánica, automática e inevitable de la situación de clase y su pertenencia. Hay una conciencia de clase más de tipo estruc-

tural, que se va forjando y consolidando con el desarrollo mismo del modo de producción y de las fuerzas sociales, que se manifiesta en la organización y luchas durante los períodos de relativa estabilidad socio-política —algo de esto se ha estudiado por diversos autores: Menjivar, 1979; Cabarrús, 1983; 1985; Cardenal 1985; Montes, 1984; 1986; entre otros.

La clase dominante es la que ha tenido una conciencia de clase totalmente consecuente y ha mantenido la unidad a su interior; si en las décadas de desarrollo y mayor prosperidad se mantenía latente, en los momentos en que ve amenazados sus intereses —como con ocasión del intento de "Transformación Agraria"— se revitaliza, unifica y pone en funcionamiento todos los mecanismos de presión, de instrumentalización del aparato del estado y de la institución armada, y exige la implementación de estrategias de represión y terror contra los que atentaran a sus intereses (ver ECA, sept.-oct. 1976 a diciembre 1979). En la clase dominada, por el contrario, la división, dicotomización de fuerzas, y la profunda alienación inducida secularmente, son las características predominantes, con pequeños grupos organizados, conscientes y luchadores por sus derechos, como excepción; en el proletariado urbano, por un lado, la sindicalización era minoritaria y, aun así, dividida en múltiples asociaciones, federaciones y tendencias (Samayoa y Galván, 1979; Montes, 1984, 173 y ss.); en el campo, a su vez, la sindicalización estaba prohibida de hecho, y mientras los pequeños propietarios y los colonos mantenían los mayores niveles de alienación —absteniéndose de cualquier participación en organizaciones populares o, peor aún, sirviendo de base a la infraestructura de dominación y represión, como era ORDEN—, entre el semiproletariado y el proletariado rural la conciencia y la participación organizativa se distribuía entre las organizaciones campesinas consecuentes y las de represión y cooptación (Cabarrús, 1983; 1985; Cardenal, 1985) —o ante el intento y debate de la "transformación agraria" se mantenían pasivos o como simples espectadores los posibles beneficiarios (Montes, 1986, 147-174)". En las capas medias, a su vez, la división y la alienación propia de las mismas era lo predominante, con pequeñas islas de conciencia y organización, principalmente en el magisterio nacional, aglutinado primero en ANDES 21 de junio y luego consolidado por las luchas libradas, especialmente en las de 1971 (UCA, 1971), y en algunos reducidos grupos de los empleados públicos y bancarios, sobre todo —además de la peculiar y conocida posición y opción de la universidad nacional.

El deterioro progresivo de las condiciones de vida por causa de las estructuras violatorias de los derechos económicos, sociales y culturales de las grandes mayorías —estructuras de muerte (Montes, 1988a)—, agudizado por acontecimientos explosivos, provocados ellos mismos por tal deterioro, forzarían a una conciencia creciente y consolidación de las

clases sociales o de los grupos más consecuentes y combativos a su interior. La guerra con Honduras, el fracaso en la obtención de los objetivos propuestos, y las funestas consecuencias que se derivaron —repatriación de unos 100,000 campesinos y la subsiguiente presión sobre la tierra y el escaso mercado de trabajo, cierre de las fronteras con Honduras y el aislamiento comercial de El Salvador—; los fraudes electorales de 1972 y 1977 —con el bloqueo a cambios políticos por vía eleccionaria (Hernández-Pico y otros, 1973)—; el intento fallido de "transformación agraria" propuesto por el gobierno en 1976 y la ola de represión contra las incipientes y débiles organizaciones campesinas, la iglesia católica y otras cuantas instituciones —y la correspondiente frustración de toda esperanza de cambios económico-sociales por la vía pacífica—; llevarían a un aglutinamiento mayor de la clase dominante amenazada, a la opción por la vía revolucionaria y armada a sectores de la "intelligentsia" y capas medias principalmente, al crecimiento y unificación progresiva de la organización popular en una parte del campesinado, al robustecimiento del proletariado urbano más consciente, y a un fortalecimiento y posterior alianza de sectores de las capas medias, desde el magisterio a grupos importantes de los Intelectuales y empleados, con raíces incluso en la institución armada. Pero las grandes mayorías, las masas no conscientes ni organizadas, se mantendrían predominantemente a la expectativa, o pasivamente frente a los acontecimientos y frente a la crisis en proceso de aceleración.

Sin embargo, creo que la conciencia de clase y la opción consecuente —o la ausencia de ella y la acción contraria a la misma—, no sólo se vuelven más consistentes en la misma lucha de clases, sino que se manifiestan con más claridad en el comportamiento de las diversas fuerzas sociales en las coyunturas críticas, tanto más en una crisis orgánica como la que experimenta el bloque histórico salvadoreño en el presente. Por tal razón, estimo que es interesante desarrollar con más extensión este punto en la siguiente parte de mi trabajo.

I. Análisis coyuntural de las fuerzas sociales

Se puede caracterizar la crisis salvadoreña actual como de "crisis orgánica", de acuerdo al análisis gramsciano (Portelli, 1978), no sólo ni tanto por la ruptura del vínculo entre la clase dominante y los intelectuales orgánicos —primero por el golpe de estado del 15 de octubre de 1979, luego por el paso de algunos intelectuales, militares y burócratas a los frentes revolucionarios (democráticos o armados)—, que se podía recomponer —y en parte se recompuso—; sino por la disolución de la hegemonía a nivel de la sociedad en su conjunto. No se ha logrado reconstruir la sociedad civil ni lograr un consenso para toda la sociedad, dividida frente a dos proyectos antagónicos; mientras el bloque histórico en crisis

pretende un consenso por medio de la ideología antirrevolucionaria y a través de repetidas elecciones —que supuestamente deslegitiman la alternativa revolucionaria—, el bloque histórico en formación busca también un consenso a través de un proyecto y una ideología acorde con los supuestos intereses de la clase dominada, y por medio de repetidas ofertas de diálogo-negociación; y ninguno de los dos bloques logra un consenso nacional. Pero tampoco se ha logrado reconstruir la sociedad política, como lo demuestra la vigencia de una guerra desatada por casi ya ocho años, la existencia de dos fuerzas beligerantes y armadas incapaces de aniquilar a la contraria en plazos previsibles, y la persistencia también de zonas bajo predominio de cada una de las partes —las proporciones diferenciadas o desiguales de ambas partes no son pertinentes, dado que son suficientes para no ser derrotadas y para desestabilizar a la contraria y al conjunto de la sociedad e impedir la reconstrucción de una sola sociedad política.

1. Explosión de la crisis orgánica:

A mi juicio, el período nuclear de la explosión de la crisis orgánica no son los últimos meses de 1979, con el golpe de estado y sus consecuencias, que trataron de ser cooptadas por la clase dominante por medio de distintos mecanismos de presión, hasta conducir a la renuncia de la primera "junta revolucionaria de gobierno" y a la derechización de la institución armada (ECA, sept. 1979 a en.-feb. 1980; UCA, 1982). El nudo de la crisis se desata en los primeros meses de 1980:

1) la institución armada, bajo presión norteamericana, se desliga de la clase dominante, se alía con la democracia cristiana, y se compromete a impulsar reformas en las estructuras económicas —reforma agraria, bancaria y del comercio exterior—, al tiempo que opta por la guerra contrainsurgente y la militarización del país, reprimiendo no sólo a los grupos revolucionarios armados, sino a todas las organizaciones que los apoyen y atenten contra la paz que se quiere imponer;

2) la clase dominante —fracasada en el intento de recomponer la alianza con la institución armada para que defienda sin restricciones sus intereses— se aglutina y unifica, percibiendo la necesidad de crear nuevamente los instrumentos propios de dominación y hegemonía —delegados en la institución armada y en la "clase gobernante auxiliar" desde 1931—, por lo que necesita de un partido político que la represente y defienda sus intereses en los poderes del estado —ya no le sirve el partido oficial, pues el de hoy está en otro tipo de alianza y adopta políticas que menoscaban la hegemonía de la clase dominante—, por lo que tras intentos de control y/o utilización de partidos preexistentes de derecha, se decide a crear ARENA, robustecerlo y lanzarlo a la contienda política, primero para impedir el progreso de la reforma agraria en el período 1982-

84, luego para limitar su extensión y alcance en la nueva Constitución Política, más tarde para controlar o neutralizar al ejecutivo y legislativo en las posibles medidas reformistas, finalmente para tomar el poder legislativo y municipal en 1988 y aspirar al control del ejecutivo en 1989 y así recomponer todo el aparato de dominación de clase por medio del estado; al mismo tiempo, creará sus propios mecanismos de coerción y recomposición de la sociedad política por medio de grupos militarizados, o por la presión, exigencia, ofertas y contactos permanentes con la institución armada;

3) la clase dominada se lanza a las calles de San Salvador, primero a demostrar su cohesión y fuerza, el 22 de enero de 1980, tras la fundación de la Coordinadora Nacional (CN), con lo que toma conciencia de su gran número, diversidad de organizaciones, fracciones y capas que la integran, así como del apoyo y simpatía que despierta en grandes sectores de la población, pero que al ser reprimida y masacrada —tanto en esa ocasión como en los funerales de Monseñor Romero—, toma conciencia de que no le dejan otra alternativa que la vía revolucionaria, y opta por la insurrección y la guerra popular prolongada, que requiere la incorporación, entrenamiento y equipamiento armado;

4) las capas medias se escinden en dos opciones opuestas: si fuertes e importantes contingentes, tanto de "intelligentsia" como de "empleados" se unen a los frentes revolucionarios —democrático o armado—, otro gran sector cree que la democracia cristiana representa sus intereses, es la expresión política de su "clase", y piensa que es posible una tercera vía, una tercera opción sustentada en la base social de las capas medias, carentes de estructura consistente, ni económica, ni militar, ni ideológica, ni social, sino puramente superestructural —en los niveles más abstractos de la superestructura—, abocado a un repetido fracaso del intento —por más soporte y sustentación que le den fuerzas externas e internacionales que cifran más los proyectos en deseos voluntarísticos que en análisis estructurales (Montes, 1984).

A partir de ese momento, las pequeñas coyunturas que se van presentando, los reacomodos de fuerzas y alianzas, las pequeñas conquistas y pérdidas de fuerzas sociales, los cambios en la cúpula del poder político civil o militar, los repetidos y fallidos intentos de reconstrucción del bloque histórico por diversos caminos, no han logrado reconstruir ni la sociedad civil ni la sociedad política, es decir, rehacer la hegemonía sobre el conjunto de la sociedad, y El Salvador permanece en una situación de crisis orgánica, manifestada en la guerra civil y en la falta de consenso nacional. Durante todos estos años las dos fuerzas sociales fundamentales —la clase dominante y propietaria de los medios de producción, y el movimiento revolucionario que reivindica la representatividad de la clase dominada y la defensa de sus intereses— se han ido unificando,

fortaleciendo y consolidando, librando su lucha no sólo contra el adversario, sino en conquistar la alianza y apoyo de los "sectores medios" —mientras una buena parte de éstos se oblina en ir contra la historia y el comportamiento o límites de las estructuras, para convertirse en el núcleo y la base de un nuevo bloque histórico (Montes, 1984). Si desde una perspectiva teórica y de aplicación universal las "capas medias" son incapaces de constituirse en verdadera clase social —mucho menos de ser la clase fundamental sobre la que se estructure un nuevo bloque histórico (Montes, 1980)—, en El Salvador es aún más quimérico, dada la reducida participación cuantitativa en la estructura de clases —como se ha visto ya—, dada la gran concentración de la propiedad en una ínfima cúpula demográfica, y dada también la polarización extrema entre las clases en los niveles sociales, ideológicos y bélicos; pensar en las "capas medias" como núcleo y clase social fundamental para una alternativa distinta de reconstruir un bloque histórico es no sólo inviable sino imposible; a lo más se podrá lograr una alianza y/o unión estratégica de diversas fuerzas sociales, que se constituyan en grupo de presión, e incluso en un fuerte movimiento social hacia la obtención de la paz y de la solución política al conflicto a través de un más amplio consenso en un proyecto que no lesione fundamentalmente los intereses de las clases y capas sociales que componen la estructura, si es que eso es posible.

2. Comportamiento de las clases sociales

El grado de conciencia de cada una de las clases sociales, de sus fracciones y demás divisiones, de alguna manera se puede medir y captar a través del comportamiento y opciones que adoptan frente a diversos acontecimientos a lo largo de la crisis orgánica. Hasta diciembre de 1983 básicamente lo he estudiado y analizado en el trabajo ya citado (Montes, 1984). Aquí pretendo exponer brevemente algunos elementos analíticos complementarios y añadir algunos hechos y comportamientos principales ocurridos en los casi cinco años últimos.

La clase dominante ha seguido unificándose, fortaleciéndose y consolidándose, tanto a nivel de intereses económicos, por medio del liderazgo de las instituciones gremiales de la empresa privada y por medio de la lucha sostenida en contra de las medidas reformistas y a favor de sus intereses, como a nivel político por medio del partido ARENA, que ha ido incrementando su poder político, hasta conquistar la mayoría en la asamblea legislativa y en los concejos municipales en 1988, y se prepara a dar la batalla final para el control total del aparato del estado en 1989, con lo que pretendería reconstruir la hegemonía sobre la sociedad y restaurar el bloque histórico que le favorece, si es que ello dependiese sólo de la detentación de esa cuota del poder político.

La vanguardia revolucionaria de la clase dominada, por su parte, no

sólo mantiene la guerra de insurgencia y se robustece militarmente, sino que ha logrado mantener la base social necesaria para enfrentar al adversario y sus fuertes e inagotables apoyos bélicos, económicos, ideológicos y políticos, y se ha impuesto de hecho como una fuerza sociopolítica que debe ser tenida en cuenta en el proceso salvadoreño y que tiene que participar en diálogos para la solución de la crisis. El crecimiento acelerado y consistente de la base social insurgente se vio detenido por la estrategia contrainsurgente, por las decenas de miles de asesinados de la población civil y el terror subsiguiente creado en la población, por el exilio de más de un millón de salvadoreños —en gran parte hostiles al régimen imperante, y simpatizantes o apoyo del movimiento revolucionario (especialmente entre los emigrados al área mesoamericana)—, por la cooptación de una parte del campesinado beneficiario de la reforma agraria, y por la despolitización y pasividad de una buena proporción de los desplazados internos, que huyeron de la guerra, pero su presencia en zonas controladas por el gobierno, su dependencia de la ayuda para subsistir, su permeabilidad a la sistemática campaña de propaganda ideológica del sistema, así como por el conflicto interno creado con la militarización de sus hijos —el subsidio económico proveniente de sus salarios castrenses, la mentalización transmitida, e incluso las consecuencias de muerte y lesiones de guerra que inculparán no sólo a la institución armada que los forzó a combatir, sino a los insurgentes que les causaron físicamente los daños—, los pone del lado del régimen, o cuando menos pasivos y "neutrales" en el conflicto —la previsión para el futuro de esa gran masa de desplazados, principalmente en las nuevas generaciones, es que se vean arrojados a integrar el hasta ahora reducido "lumpen", por el trauma vivido, su carencia de capacitación para la nueva vida a que se han visto forzados, la incapacidad del sistema de integrarlos laboral y socialmente, y la experiencia degradante de la dependencia e instrumentalización que deteriora el respeto y la imagen que puedan tener de sí mismos, lo que modificaría sustancialmente la estructura social salvadoreña con tamaña derivación hacia la capa ínfima (una atención especial debe irse prestando al proceso social de la masa creciente de mutilados de guerra y licenciados del servicio militar, para ver si son incorporados a la vida productiva y social, o son forzados también a incrementar el "lumpen"). Por otro lado, las organizaciones sociales y laborales simpatizantes o solidarias con la insurgencia, no sólo han sido deslegitimadas y combatidas ideológicamente por el régimen, sino que han sido objetos focales de represión, disolución y debilitamiento permanente. Sin embargo, el movimiento insurgente ha creado nuevas formas de vinculación y alianza o apoyo en la clase dominada y en las capas medias, alabando, apoyando o secundando la recomposición de bases sociales consecuentes, que a medida que se iban desgastando generaban otras nuevas —desde la CRM hasta el Comité 10. de mayo, la CST, UNTS,

CODYDES, los Comités de Madres, CRIPDES o la CNR.

Es en el "proyecto alternativo de centro" donde se observa mayor inconsistencia y menor continuidad —acorde con los condicionamientos estructurales a que ya se ha hecho referencia—; la carencia de una clase social estrictamente tal como base, pretende ser suplida con alianzas de fracciones y sectores, principalmente nucleados en torno a las "capas medias"; pero la incapacidad de resolver los problemas y expectativas, tanto económicas como sociales, y de solucionar la guerra, lleva a continuas frustraciones, desarticulaciones y esfuerzos de recomposición permanente —ya sea a través de "pactos sociales" con la UPD, con la UNOC, el COC, o con las cooperativas de la reforma agraria (instrumentalizadas en muchas oportunidades como base social del proyecto contrain-surgente y "de centro", presionadas por la inseguridad del futuro y por la gestión burocrática y la deuda agraria)—; pero la misma organización, libertad brindada y fracaso en cumplir las promesas —además de la manipulación político-ideológica constante, ya sea de parte del mismo régimen, ya sea de instancias externas como el IADSL (Casper, 1986)— les conducen a cierta toma de conciencia, pugna por sus intereses, desertión y crisis en la base social, y a la indispensable nueva articulación, manipulación y cooptación de las fuerzas sociales y laborales que apoyen al régimen.

Para concluir este apartado, estimo necesario analizar brevemente un fenómeno que puede llamar la atención en la dinámica de diversas fuerzas sociales en este proceso salvadoreño: el surgimiento, escisión, composición, disolución, recomposición de diversas organizaciones, ya sean de apoyo al intento de creación de un bloque de centro, ya sean de opción más consecuente de clase. La explicación del hecho la encuentro predominantemente en la misma crisis orgánica que padece la sociedad salvadoreña, en la aguda polarización creada por la misma y por las fuerzas fundamentales de los dos intentos de bloque histórico antagónicos, así como en el de construir uno alternativo de centro, y en la lucha de ellos por conquistar a las diversas fuerzas sociales para ampliar su base y alianza en la reconstrucción o en la construcción del bloque histórico. La consecuencia de lo anterior es el desgaste sistemático y permanente de las diversas organizaciones aliadas, de los pactos y alianzas, por dos vías concurrentes: una es el ataque y la batalla constante a que están sometidas por la campaña ideológica, física y psicológica acusadora de ser instrumento y/o fachada de la insurgencia —mientras las aliadas al "intento de bloque de centro" son atacadas por la derecha considerando a éste una mediación para el triunfo de la izquierda marxista-leninista, y por la izquierda como mediación e instrumento del proyecto imperialista—, además de la presión y esfuerzo constante de los grupos hegemónicos en cada proyecto por radicalizar, instrumentalizar y sub-

sumir a dichas organizaciones, subordinando a lo político su autonomía e identidad laboral o gremial; la otra es el fracaso, tanto en la consecución de los objetivos laborales y/o gremiales propios, como en la solución de la crisis orgánica, lo que conduce a unos a la radicalización que justifica y legítima las acusaciones y ataques de la primera vía, y a otros a la desilusión y la deserción; en todo caso, a la desnaturalización y desgaste de la organización, en sus objetivos, y como instrumento de solución de la crisis orgánica. Sin embargo, dado que la crisis se mantiene irresoluta, y que las condiciones de vida se deterioran para las grandes mayorías y para el sector organizado, el mismo proceso exige y fuerza al surgimiento de nuevas instancias, a la recomposición de fuerzas y a la constitución o reconstrucción de alianzas.

3. Las masas no organizadas:

Las grandes mayorías de la población, sin embargo, permanecen desarticuladas, inorganizadas, y sin medios propios de expresión y lucha por la defensa de sus intereses, y sólo pueden expresarse en contadas oportunidades, ya sea que se les consulte directamente, ya sea que den su opinión indirectamente a través del voto electoral. Por lo que se refiere a la primera vía, repetidamente se expresan en el sentido de que la crisis económica y la guerra son los problemas que sienten como más graves y que les urge sean resueltos a través del diálogo o por otro camino racional (Martín Baró, 1987; IUDOP, 1986-1988). En cuanto a la segunda vía, las elecciones, se aprecia una disminución creciente en la participación popular, lo que no se puede atribuir exclusivamente al desgaste del método como expresión de la voluntad popular y como camino de solución a la crisis del país, pero que probablemente también está influido por ello (Montes, 1985; 1988). De acuerdo a los resultados de las últimas elecciones, en marzo de 1988 aproximadamente 1,100,000 salvadoreños residentes en el país y en edad de votar no concurrieron a las urnas —ya fuera que no se empadronaron (300,000), o que empadronados no obliuvieron el carnet electoral (otros 300,000), o que teniendo carnet no fueron a votar (otros 500,000; todas las cifras de acuerdo a los datos oficiales del CCE)—, lo que representa casi la misma cantidad de los votos emitidos; pero 220,000 votos no fueron válidos, lo que hace que los votos válidos apenas superen el 40% de los posibles (Montes, 1988). Si se excluyen los que tuvieron dificultades concretas en el empadronamiento o en la obtención del carnet electoral, o los que se vieron impedidos por temor o por carencia de transporte el día de las elecciones, todavía queda un elevado porcentaje que se abstuvo de votar por propia voluntad —más el 19% que en su mayoría no halló en la restringida oferta política opciones que les satisficieran o que presentaran perspectivas de resolver los problemas fundamentales que afectan a la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, en las mismas elecciones se puede percibir el grado de conciencia y de alienación de las clases sociales, de sus fracciones y capas o demás subdivisiones. En la medida en que sean válidos los datos correspondientes a cada una de las clases y fracciones, no se puede entender que el partido ARENA, representante de los intereses de la clase dominante, que cuenta entre un 0.3% y menos del 7% de la población, pueda obtener casi medio millón de votos —el 48.1% de los válidos, 38.9% de los emitidos, y 17.9% de todos los supuestamente posibles (cifras que superan incluso la suma de la clase dominante y de las capas medias)—, a no ser que una elevada proporción de componentes de otras clases sociales y fracciones (muchos de ellos pertenecientes a la clase dominada) se hayan plegado a esa opción ideológico-política ajena y contraria a su extracción de clase (Montes, 1988, 182-184). Pero tampoco se entiende que el partido demócrata cristiano, exponente y representante de las "capas medias" —que en el mejor de los casos concentran entre el 10% y menos del 26% de la población—, haya podido obtener en las elecciones de 1985 más de medio millón de votos válidos (el 52.35% de los mismos), y en 1988 más de 300,000 —35.1% de los válidos, 28.4% de los votos emitidos, y 13.1% de los supuestamente posibles (Ibidem)—, a no ser que también algún porcentaje de los integrantes de la clase dominada haya sido víctima de la alienación de creer que en un partido que responde a los intereses e ideología de las "capas medias" y del proyecto norteamericano puede atender a sus necesidades e intereses y resolver los problemas del país en beneficio de las grandes mayorías —si bien en las elecciones de 1988 se ha mostrado que el proceso y la experiencia bajo la conducción política de la democracia cristiana ha despertado cierta conciencia en medios populares, a no ser que se haya profundizado la alienación de clase social en algunos de ellos que se hayan pasado a votar por ARENA, no para "agudizar las contradicciones", sino con la esperanza de encontrar ahí paliativos a su situación y a la crisis del país.

Perspectivas

Dada la actual correlación de fuerzas, tanto internas como internacionales, no es previsible que se modifique sustancialmente la estructura social salvadoreña; no ya por el triunfo de un proceso revolucionario, pero tampoco por una serie de reformas y reajustes —tanto menos con la consolidación de la clase dominante y de su expresión política en ARENA, y la previsible conquista del poder político en el ejecutivo, o de la capacidad, cuando menos, de ejercer desde la Asamblea Legislativa fuertes presiones en defensa de sus intereses de clase.

Tampoco se prevé que la guerra civil tenga una solución a corto y previsible plazo, ni militar ni política. Si los personeros norteamericanos

pronostican un período de seis a ocho años más para lograr una supremacía clara e irreversible del ejército sobre los insurgentes, y éstos cada vez sostienen más consistentemente la tesis de la "guerra popular prolongada" —y la posibilidad de una "insurrección popular" no se ve como realista—; quiere decir que la solución por la vía militar no se vislumbra para ninguna de las partes. Por su lado, la solución política, por la vía del diálogo y la negociación, se va postergando indefinidamente, sin abordarla en serio y con profundidad, y la actual correlación de fuerzas internas no le es más favorable —a no ser que haya una presión en tal sentido por la administración norteamericana, si es que triunfara el partido demócrata y adoptara esta política hacia la región, o que la participación de la "Convergencia Democrática" en las elecciones presidenciales de 1989 atrayera una gran afluencia de votantes que presionen a compromisos políticos en esa dirección.

Una alternativa para salir del impasse tendría que pasar por la toma de conciencia auténtica en los integrantes de las fracciones y demás subdivisiones, tanto de las "capas medias" como, sobre todo, de la clase dominada, despojándose de la alienación introyectada, para alcanzar una coordinación estratégica de las diferentes fuerzas sociales que las componen o emanan de ellas, de manera que se conviertan en una gigantesca fuerza de presión, en un movimiento social mayoritario que exija la paz y los cambios estructurales indispensables para la satisfacción de las necesidades básicas y la garantía de todos los derechos humanos de las grandes mayorías.

Si la democracia es el sistema que se predica como válido y deseable, y si a la democracia se le llena del contenido de su propio significado etimológico, hay que reconocer que en El Salvador nunca ha existido una verdadera democracia real, que el pueblo nunca ha tenido el poder, pues la clase dominada, que constituye la inmensa mayoría, no sólo no lo ha detentado, sino que tampoco ha tenido un partido político que la represente, defienda sus intereses auténticos y provenga de su seno. Ni los partidos políticos surgidos de la minúscula clase dominante pueden representar a las mayorías y defender sus intereses realmente —sino, a lo más, hacerles simbólicas concesiones a cambio de sus votos—; ni tampoco los partidos surgidos y representativos de las pequeñas y fraccionadas "capas medias" son auténticamente populares, representan ni defienden los intereses de la clase dominada, de las grandes mayorías populares —por más que se declaren y presenten como tales, en contra del análisis estructural y de la praxis política concreta. La vía democrática, real, pasa por la concientización y la articulación unificada de las grandes mayorías, de la clase dominada —y de una parte de las capas medias que objetivamente pertenecen a esa clase aunque no lo perciban como tal—, para crear una expresión política propia y auténtica, un partido que la

represente y defienda sus intereses reales y concretos, para alcanzar la democracia real que se dice pretender, salvaguardando los derechos e intereses de todos los ciudadanos, pero en primer lugar los de las grandes mayorías, del pueblo.

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA

- Cabamús, Carlos R.; GENESIS DE UNA REVOLUCION; México, Casa Chata, 1983.
- "El Salvador. De movimiento campesino a revolución popular"; en HISTORIA POLITICA DE LOS CAMPESINOS LATINOAMERICANOS (Pablo González Casanova, Coordinador); México, s. XXI, 1985, 77-115.
- Cardenal, Rodolfo; HISTORIA DE UNA ESPERANZA. Vida de Rutilio Grande; San Salvador, UCA-Editores, 1985.
- Colindres, Eduardo; FUNDAMENTOS ECONOMICOS DE LA BURGUESIA SALVADOREÑA; San Salvador, UCA-Editores, 1977.
- ECA; revista Estudios CentroAmericanos (ECA); San Salvador, UCA.
- Gurvitch, Georges; TEORIA DE LAS CLASES SOCIALES; México, EDICUSA, 1971.
- Hernández-Pico, J., y otros; EL SALVADOR: AÑO POLITICO 1971-72; San Salvador, UCA, 1973
- Instituto; EL SALVADOR 1985. DESPLAZADOS Y REFUGIADOS; San Salvador, UCA, Instituto de Investigaciones, 1985.
- EL SALVADOR 1986. EN BUSCA DE SOLUCIONES PARA LOS DESPLAZADOS; San Salvador, UCA, Instituto de Investigaciones de Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA), 1986.
- IUDOP; Informes varios sobre diversos sondeos de opinión; San Salvador, Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), 1986-1988 (mimeo).
- Lenin, V.I.; "Una gran iniciativa"; en OBRAS ESCOGIDAS, Vol. 3, 233-254; Moscú, Progreso, 1961.
- Martín Baró, Ignacio; ASI PIENSAN LOS SALVADOREÑOS URBANOS (1986-1987); San Salvador, UCA-Editores, 1987.
- Menjívar, Rafael; FORMACION Y LUCHA DEL PROLETARIADO INDUSTRIAL SALVADOREÑO; San Salvador, UCA-Editores, 1979.
- Montes, Segundo; "Reflexiones sobre las 'clases medias'"; en BOLETIN de Ciencias Económicas y Sociales, abril 1980, 171; San Salvador, UCA, 1980.
- "La supuesta neutralidad de la ciencia"; ibidem, junio-diciembre 1980, 203-205.
- "¿Cuál es el modo de producción dominante en El Salvador?"; (y "Crítica a una crítica"); ibidem, enero-febrero 1983, 30-37 (y mayo-junio 1983, 231-235).
- EL SALVADOR: LAS FUERZAS SOCIALES EN LA PRESENTE COYUNTURA (enero 1980 a diciembre 1983); San Salvador, UCA, 1984.
- "Las elecciones del 31 de marzo"; en revista ECA, abril 1985, 215-228; San Salvador, UCA, 1985.
- EL AGRO SALVADOREÑO (1973-1980); San Salvador, UCA-Editores, 1986.
- "El Salvador: la tierra, epicentro de las crisis"; en BOLETIN de Ciencias Económicas y Sociales, julio-agosto 1986, 240-256; San Salvador, UCA, 1986a.
- SALVADOREÑOS REFUGIADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS; San Salvador, UCA, Instituto de Investigaciones, 1987.
- "Las elecciones del 20 de marzo de 1988"; en revista ECA, marzo-abril 1988, 175-189; San Salvador, UCA, 1988.
- Montes, S., Meléndez, F. y Palacios, E.; LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN EL SALVADOR; San Salvador, UCA (IDHUCA), mayo 1988a.
- PCS; FUNDAMENTOS Y TESIS DE LA LINEA GENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE EL SALVADOR; en Fundamentos y Perspectivas, Revista teórica del PCS, San Salvador,

- CNP, junio de 1980.
- PERA; V EVALUACION DEL PROCESO DE LA REFORMA AGRARIA; San Salvador, MAG-OSPA-PERA, Doc. PERA-1-07-85, diciembre 1985 (mimeo).
- Portelli, Hugues; GRAMSCI Y EL BLOQUE HISTORICO; México, s. XXI, 1978 (12a.).
- Samayoa, S. y Galván, G.; "El movimiento obrero en El Salvador ¿resurgimiento o agitación?"; en revista ECA, julio-agosto 1979, 591-600; San Salvador, UCA, 1979.
- El cierre patronal de las empresas: prueba de fuego para el sindicalismo revolucionario en El Salvador"; *ibidem*, septiembre 1979, 793-800.
- Sermeño L., José A.; "Comportamiento reproductivo de la juventud. El caso de El Salvador" (a publicarse en ECA, junio 1988); San Salvador, enero 1988 (mimeo)
- Sevilla, Manuel; "Visión global sobre la concentración económica en El Salvador"; en BOLETIN de Ciencias Económicas y Sociales, mayo-junio 1984, 155-190; San Salvador, UCA, 1984.
- Thome, Joseph R.; "Reforma Agraria en El Salvador"; *ibidem*, julio-agosto 1984, 235-253; San Salvador, UCA, 1984.
- UCA; ANALISIS DE UNA EXPERIENCIA NACIONAL (ANDES - MINISTERIO DE EDUCACION); San Salvador, UCA, 1971.
- EL SALVADOR: ENTRE EL TERROR Y LA ESPERANZA. Los sucesos de 1979 y su impacto en el drama salvadoreño de los años siguientes. San Salvador, UCA-Editores, 1982.

